



Enero a diciembre de
2018

Informe de Gestión

Asociación de Trabajo
Interdisciplinario - ATI



Juliana Millán y Liliana Vargas
DIRECCIÓN COLECTIVA

Contenido

I. Contexto	1
II. Proyectos desarrollados.....	4
Redes.....	4
Sindicatos.....	5
III. Espacios de redes y alianzas.....	6
Mesa Nacional de Seguimiento a la implementación de los acuerdos y construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.....	6
Plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo.	7
Primer informe sombra sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia presentado ante el comité CEDAW.....	7
IV. Ejecución de fondos.	8
V. Gestión política y económica.	8

I. Contexto

El año 2018 fue un año marcado por el escenario de las elecciones presidenciales, las afujías del gobierno saliente por avanzar legislativamente en la implementación de los acuerdos de paz antes de terminar su mandato y el inicio de un gobierno que dejaba en su momento muchas incertidumbres frente a sus políticas de paz, económicas y sociales.

Durante el primer semestre, se dieron los últimos esfuerzos conjuntos entre el la sociedad civil y el gobierno por tratar de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz que éstos no fueran revertidos fácilmente. Su gabinete ministerial trabajo en diferentes espacios de la mano de las organizaciones sociales para dejar establecidas medidas que permitieran de alguna manera blindar los acuerdos frente al nuevo gobierno, fuera este de izquierda o de derecha.

La llegada del partido FARC al congreso y la instalación de la Justicia Especial Para La Paz JEP fueron decisivos, estos dos hechos representaron momentos históricos sin duda para el país. Sin embargo cada uno de ellos tuvo que sortear fuertes dificultades, como el señalamiento a Jesús Santrich, (uno de los líderes del partido FARC y representante del mismo como senador de la república ante el Congreso) de hacer parte de operaciones de narcotráfico, después de iniciadas las negociaciones y durante la vigencia del acuerdo y por tanto su supuesto pedido en extradición por EEUU, acusaciones hechas sin fundamento legal y pruebas claras. A su vez, la JEP tuvo que superar un juicio de constitucionalidad que por poco acaba con la posibilidad de establecer una jurisdicción especial, que fuera capaz de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los diferentes actores que intervinieron en el conflicto y así garantizar, verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En mayo y como otro “logro” del gobierno saliente, Colombia entra a hacer parte de la Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico (OCDE). De esta manera el gobierno de Santos posiciona a Colombia como un país de renta media con capacidad de generar mecanismos internos de cooperación e incluso de cooperar con otros países con índices bajos de desarrollo. Sin embargo la realidad es otra, los niveles de desigualdad e inequidad siguen siendo muy elevados y son muchos los conflictos asociados a problemas sociales por la poca capacidad económica de los colombianos que les permitan acceder a servicios como salud, educación de calidad y un empleo digno.

De acuerdo al informe publicado en 2018 por la Escuela Nacional Sindical la distribución del ingreso en Colombia es una de las más inequitativas del mundo (CG del 0,517), tenemos una de las mayores tasas de desempleo en la región, 8.8% en promedio para la década (2006 - 2016). Por otro lado, el 48.7% de la población recibe salarios menores al salario mínimo, y éste es de por sí, uno de los más bajos de la región, hay un aumento en la informalidad y condiciones aún más precarias de contratación, seguridad social y brecha salarial para las mujeres y los jóvenes.

Respecto al escenario electoral, las elecciones presidenciales generaron una fuerte polarización de diferentes sectores sociales entre los que se debatía la continuidad de los acuerdos de paz y quienes siguen planteando una salida guerrillera a los conflictos que vive Colombia. Parte de las grandes dificultades que suponen la polarización del país frente a la salida negociada al conflicto armado es la dificultad, incluso de las propuestas de izquierda, de ligar el mundo rural con el mundo urbano y el inexorable crecimiento de este último frente a las presiones sociales, políticas, económicas y ambientales del primero. De tal forma que nunca fue claro como el camino de las negociaciones, los acuerdos y su implementación podrían conectarse con una dinámica creciente de inequidad en las ciudades y esto como se veía reflejado en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales.

En la contienda Iván Duque candidato por el partido Centro Democrático, fue elegido presidente de Colombia con 10.3 millones de votos, en unas elecciones que precisaron de una segunda vuelta electoral. Esta elección sin duda nos dejó fuertes incertidumbres sobre la posibilidad de avanzar en la implementación de los acuerdos y de un recrudescimiento de la guerra y los conflictos en los territorios estratégicos para megaproyectos y de control del narcotráfico.

El resurgimiento de la opción armada para resolver los conflictos territoriales en el país no tardó en evidenciarse, con el cambio de gobierno, se observó un aumento exponencial del número de asesinatos de líderes sociales vinculados a procesos de restitución de tierras y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Durante el año 2018, 226 líderes fueron asesinados de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo y Paz (Indepaz), de estos se contabilizaron 105 líderes campesinos, ambientalistas y comunales asesinados; 44 líderes indígenas y 40 personas vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS. La Agencia de Información Laboral AIL reportó 161 agresiones contra sindicalistas, particularmente incrementadas durante el último trimestre de 2018; 14 homicidios, 5 atentados, 134 amenazas, 4 hostigamientos y 1 allanamiento ilegal.

Con el nuevo gobierno, los escenarios de diálogo y construcción para la implementación de los acuerdos y en particular con la propuesta ya desarticulada en el gobierno anterior pero vigente en el espíritu colectivo de las organizaciones sociales de la reforma rural

integral RRI, empezaron a desmoronarse. Los programas, planes y presupuestos previstos para la implementación de los acuerdos, las responsabilidades institucionales acordadas y aún las mesas estratégicas de conceptualización que permitieron abrir debates en el país sobre temas estructurales, como la existencia misma del campesinado, fueron intervenidas con acciones previsibles de gobiernos en tránsito, pero no con una actitud evidentemente arrasadora sino estratégicamente pasiva. Es clara la misión del nuevo gobierno de avanzar en la implementación, de lo acordado con los gremios en años anteriores como la ley Zidres o el SNIA, en tanto lo acordado con los territorios y comunidades PDET y PNIS se extingue lentamente.

Este gobierno también entró a la Casa de Nariño con la propuesta de una reforma fiscal que generó gran polémica por la posibilidad de gravar con IVA los productos de la canasta familiar, exentos hasta el momento, y el fuerte golpe que esto sería para la clase media y baja en el país. Finalmente el gobierno da reversa en algunos aspectos de su propuesta y la maquilla como una “ley de financiamiento” que buscaría superar el déficit fiscal y aumentar las arcas del Estado en 14 billones para invertir en sus políticas sociales.

Otro de los hechos importantes durante el 2018, fue la fallida consulta Anticorrupción, más de 11.6 millones de personas votaron esta consulta, pero desafortunadamente no se llegó al umbral necesario para establecer sus mandatos. En un primer momento, por el alto número de votantes, se llegó al acuerdo con el gobierno electo, de impulsar reformas legislativas que permitieran establecer normas para frenar este fenómeno en el país. Sin embargo, ocho meses después sus promotores son conscientes de los nulos avances en este sentido.

Finalizando el año 2018 el gobierno tuvo que enfrentar un paro del sector de la educación pública por su desfinanciación en el presupuesto nacional. Fueron 64 días de paro estudiantil, las marchas estuvieron apoyadas por FECODE, otros movimientos sociales e incluso por estudiantes de instituciones privadas de educación superior. Los estudiantes estuvieron reclamando una mayor inversión para el sector, que ayude a más colombianos/as a tener acceso a una educación superior de calidad y que se mejore la infraestructura de varias instituciones, que actualmente se encuentra deteriorada.

Finalmente en el mes de diciembre los estudiantes y el gobierno llegaron a un acuerdo, entre los puntos acordados están: aumentar las transferencias del Estado hacia las instituciones públicas de educación superior, en un 3,5% sobre el IPC para el 2019 y 4,65% para el 2022. Sumado a esto se aumentó el presupuesto para este sector en 4,5 billones de pesos, también se aumentan los recursos para la ciencia y la investigación, así como para la mejora de la planta física de las instituciones.

Este contexto nos deja grandes preguntas sobre el devenir de la implementación de los acuerdos, las posibilidades de superar la inequidad social y los problemas estructurales que dieron origen al conflicto en Colombia. Frente a este panorama las organizaciones sociales tendremos que recomponer nuestras estrategias de lucha e incidencia para el 2019 y más que nunca fortalecer las articulaciones territoriales, nacionales e internacionales, para ser una voz fuerte que logre posicionar la construcción de paz como un escenario posible, aun en un gobierno contrario a este ideal.

II. Proyectos desarrollados.

Durante el año 2018 se continuó con la ejecución del programa “Trabajo Decente” 2017-2021 financiado por la agencia de cooperación belga SOLSOC y que en Colombia se desarrolla con dos contrapartes: Instituto Popular de Capacitación - IPC y ATI. El programa tienen por objetivo, promover el trabajo decente para un desarrollo durable, equitativo, solidario e inclusivo: crear empleo, garantizar el derecho al trabajo y promover el dialogo social para todos y todas.

Específicamente ATI en el marco del programa tiene por objetivo, fortalecer la capacidad de acción de grupos sociales hacia la construcción de paz desde los territorios, promoviendo iniciativas de economía social y solidaria como los circuitos económicos agroalimentarios para comunidades rurales y la articulación urbano - rural. Así como ayudando a fortalecer los canales de diálogo social planeación conjunta y articulación al movimiento social de sindicatos vinculados al sector agroalimentario.

En el programa se trabaja con dos redes: Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y Comité de integración regional por la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria (SALSA); y tres sindicatos: USTIAM Unión sindical de trabajadores de la industria cervecera, bebidas, alimentos, malteros y similares (subdirectivas Tocancipá, Barranquilla y Yumbo); Sintra14 Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria Azucarera 14 De Junio (subdirectiva Palmira, Guacarí, Cerrito y Tuluá en el Valle); y Sinaltrainal sindicato nacional de trabajadores del sistema agroalimentario (seccional Tocancipá y Valle del Cauca).

Durante el año 2018 los logros alcanzados en el marco del programa fueron:

Redes

RENAF

- Reuniones de consolidación y seguimiento económico de la campaña “Llevo el campo colombiano”: Lanzamientos regionales de la campaña, reuniones regionales, nacionales, un instrumento de análisis productivo con resultados de sistematización de la producción vinculada a los mercados en 4 regiones del país (Valle, Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca).
- Se acompañó el proceso de participación de la RENAF en la mesa técnica para la agricultura familiar en el cual se avanzó en la implementación de los lineamientos de política pública para la agricultura, campesina, familiar y comunitaria ACFC, priorizando tres temas: agroecología, extensión rural y comercialización, hasta finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos. El espacio se congeló una vez entra el nuevo gobierno, pero la socialización y difusión de la resolución 464 no se detuvo.
- Se participó en espacios convocados por la Agencia de Desarrollo Rural ADR, para la creación de un sello para los productos de la AFCC. En este espacio se participó junto con otras plataformas y redes (Cumbre y ANUC) realizando análisis y

claridades sobre los procesos de reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de la ACFC.

- Se asume la dinamización del eje de articulación y movilización de la RENAF. ATI se ha posicionado fuertemente en este escenario de articulación nacional durante los tres últimos años y producto de esto las organizaciones que integran la red delegan responsabilidades de cohesión y representación. Se llega a una estructura más colectiva de la Red con mayor participación de las regiones en el Comité Nacional, enfoques temáticos más claros y responsabilidades organizativas.

SALSA

- ATI continúa acompañando el proceso de planeación y organización de la red, que en este momento cuenta con 14 organizaciones activas. Se definieron acciones por cada uno de los ejes estratégicos (visibilización, formación, comunicaciones, incidencia y seguimiento económico) en cada uno de los nodos (Centro Oriente, Sumapaz y Occidente) y en los procesos de acción conjunta de todas las organizaciones.
- En el Nodo Centro Oriente se consolidó el mercado Tejiendo Territorios con el establecimiento de un fondo solidario que permite la gestión del mercado. Se definieron responsabilidades logísticas para la realización del mercado y se hace el seguimiento. También se establecieron estrategias de posicionamiento y dialogo con los consumidores.
- En el nodo Sumapaz se avanza en la iniciativa conjunta de los mercados ASOPROMES y MOSP de abrir escenarios de comercialización permanentes en la región.
- Colectivamente todas las organizaciones deciden apostarle a un plan de trabajo conjunto para establecer un punto de acopio y distribución que permita visibilizar la posibilidad de concretar la política en acciones concretas como los circuitos, animando procesos de corresponsabilidad urbano-rural, así como dar a conocer los productos y los mercados territoriales ya existentes.
- Se fortalecen las iniciativas de comunicaciones para la articulación de las organizaciones de la red y la visibilización del trabajo de la misma en la página web del Comité SALSA B.C. y la posibilidad de anidar allí un mecanismo de comercialización virtual para el punto de distribución colectivo.
- Se realizaron varias reuniones con las organizaciones de la red para consolidar sus criterios y acciones frente a la incidencia política y el panorama político regional y local 2019.

Sindicatos

- Se acompañó el proceso de diseño y ejecución de los planes de formación sindical para los tres sindicatos. Gracias a esto se dio la cualificación de conocimientos en temáticas de historia sindical, negociación colectiva, laudos y tribunales de arbitramento, aspectos jurídicos, de comunicaciones, contables y de lectoescritura.

- Se diseñaron y publicaron las páginas web de Sintracatorce y Ustiam que están permitiendo comunicar el que hacer de estos sindicatos y visibilizando las acciones y denuncias que ellos hacen.
- Se apoyaron las actividades de fortalecimiento interno de los sindicatos: Realización de juntas, asambleas, adecuación de sedes, equipos, saneamiento contable y jurídico. Estas acciones han aumentado la credibilidad en las dirigencias sindicales y aumento de sus bases.
- Se desarrollaron jornadas de intercambio entre los tres sindicatos y con el sindicato internacional de Horval quien aporta recursos al programa para desarrollar el trabajo sindical. Esto ha permitido la sinergia dentro del programa y el apoyo internacional para la visibilización y denuncia.
- Se viabilizó la asesoría legal de forma permanente para las negociaciones con las empresas. Esto ha permitido una mayor capacidad para el dialogo y exigibilidad jurídica.
- Se abrieron espacios de trabajo con las mujeres y se está posicionando la temática de género.

III. Espacios de redes y alianzas.

Mesa Nacional de Seguimiento a la implementación de los acuerdos y construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET

En el mes de septiembre del año 2017 la RENAF, red de la que hace parte ATI, fue convocada para participar en este espacio que tienen que como objetivo dar seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz y específicamente en lo referente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y su posterior implementación de acuerdo a los Planes de Acción para la Transformación Regional PATR.

ATI acompaña inicialmente a los voceros de incidencia y articulación de la RENAF que participan en el espacio, pero luego de las tareas de construcción metodológica y sistematización en las que participa dos integrantes del equipo ATI en el primer encuentro nacional (nov. 2017), ATI empieza a formar parte de las nueve organizaciones convocadas para acompañar el espacio de articulación de las plataformas. Desde entonces la RENAF continúa siendo una de las plataformas articuladas a nivel nacional, con participación de diversas organizaciones en los escenarios regionales y nacionales y ATI forma parte del grupo metodológico de acompañamiento a la mesa.

Como parte de este acompañamiento ATI inicia una tarea de sistematización y análisis de la información que surge de estos encuentros, con base en criterios y enfoques construidos colectivamente. Tarea que luego es visibilizada y apoyada por las distintas organizaciones y plataformas nacionales, convirtiéndose en un documento para la reflexión sobre el proceso PDET y la implementación misma de los acuerdos de paz, que sitúa a la mesa en escenarios de diálogo y posicionamiento político como el Consejo Nacional de Paz, así como de revisión y debate del nuevo Plan Nacional De Desarrollo presentado por el gobierno de Duque.

Plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo.

ATI se desempeñó como secretaria técnica de este espacio hasta el mes de octubre del año 2018. En la Plataforma se atendieron tareas de representación ante espacios como la Mesa Nacional de Garantías, ODHACO y el espacio de articulación entre plataformas de derechos humanos y la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Colombia.

Se adelantaron acciones de incidencia para la continuidad del proceso nacional de garantías y la reactivación del proceso de negociación en torno al plan de acción en derechos humanos. De igual manera se apoyó el proceso de construcción de la resolución ministerial que dicta parámetros para el accionar de la fuerza pública durante las jornadas de protesta social.

En la asamblea de ODHACO se expusieron las preocupaciones de esta Plataforma frente a la persecución y asesinato de líderes sociales vinculados con luchas y reivindicaciones frente a los DESCA como lo defensores, ambientales y del territorio. Así como el panorama de incertidumbre frente a la implementación de los acuerdos de paz en el nuevo gobierno. Allí se establecieron acuerdos para incidir a nivel internacional respecto a las dos situaciones antes mencionadas y hacer presión al gobierno colombiano para continuar en la senda de la paz.

Primer informe sombra sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia presentado ante el comité CEDAW.

ATI fue convocada hacer parte de un grupo de organizaciones que de forma articulada escribirían un informe sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia, para ser presentado ante el comité CEDAW y ser usado como herramienta de incidencia a nivel, local, regional y nacional.

Hicimos parte del comité metodológico del informe y se nos encomendó la escritura del capítulo correspondiente al análisis sobre el empoderamiento económico de las mujeres en las zonas rurales.

El informe se publicó en el mes de febrero del presente año durante la 72ª sesión de CEDAW, un grupo de personas, quienes participaron en la elaboración del informe, lo presentaron en Ginebra con muy buenos resultados, esperamos que las comisionadas tengan en cuenta muchos de los elementos allí descritos para la elaboración de las recomendaciones al Estado colombiano en esta materia. Este informe también sirvió de insumo para la elaboración del concepto que presentó el CNP al Plan de Desarrollo Nacional específicamente en los temas correspondientes a mujeres y mujeres rurales.

IV. Ejecución de fondos.

ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ATI										
Estado de Actividades 2018										
Valores en COP	Presupuesto 2018	Saldo por Ejecutar 2017	Ingresos recibidos 2018	Apropiaciones efectivas institucionales	Reserva funcionamiento (Arriendos FIAN)	Reserva area administrativa (ATI-FIAN)	Total disponible	Ejecucion año 2018	Saldo por ejecutar	% Ejecucion de presupuesto
Institucional	113.363.000	104.727.875,65	26.705.469,45	45.991.385	(7.629.213)	(13.600.000)	156.195.517	83.025.112	73.170.405,21	73%
Solsoc Trabajo R	326.827.743	59.794.384,28	297.741.185,51	-			357.535.570	300.371.665,51	57.163.904,28	92%
Solsoc Sindicato	532.226.418	48.536.354,39	467.295.982,80				515.832.337	486.608.250,61	29.224.086,58	91%
Itacho	8.200.000	0,00	8.200.000,00				8.200.000	8.200.000	0,00	100%
Misereor Platafo	12.720.172,50	12.720.172,50	-				12.720.173	10.028.880	2.691.292,71	79%
Lutheran World F	7.044.000		7.044.000,00				7.044.000	5.346.231	1.697.769,00	76%
Lutheran World F	4.000.000		4.000.000,00				4.000.000	4.000.000	0,00	100%
Lutheran World F	4.000.000		4.000.000,00				4.000.000	280.000	3.720.000,00	7%
Fundación Swssa	5.600.000		5.600.000,00				5.600.000	1.450.000	4.150.000,00	26%
Total	1.013.981.334	225.778.787	820.586.638	45.991.385	(7.629.213)	(13.600.000)	1.071.127.597	899.310.139	171.817.458	110%

V. Gestión política y económica.

La gestión política de ATI durante el 2018 consistió fundamentalmente en construir y posicionar un lugar de acción- reflexión de la organización en los espacios colectivos que ya venía acompañando, redes, plataformas y alianzas, que saben pueden contar con el apoyo de un equipo que conoce y a acompañado procesos locales y de articulación regional que enlazan propuestas de soberanía alimentaria, (producción sostenible, circuitos cortos de comercialización, mercados, grupos de consumo) en el marco de propuestas económicas de transformación que presuponen horizontes distintos en el marco del cuidado, la solidaridad y la redistribución, frente al modelo de desarrollo imperante caracterizado por la competencia desleal y la acumulación.

El posicionamiento de este trabajo a nivel regional, nacional e incluso internacional en otros escenarios y con otros actores de diálogo como el movimiento sindical, ha supuesto debates internos del equipo, en términos de ampliar o re direccionar elementos de posicionamiento y análisis como el diálogo social a nivel de empresas o el trabajo decente, sin abandonar los campos de acción y referencia históricos construidos por la organización (derechos humanos, equidad de género, soberanía alimentaria y economía social y solidaria)

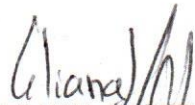
Finalmente, la situación de seguridad que por lo explicado ya en el contexto de este informe se agudizo en el 2018, ha supuesto activar alertas y relaciones de alianza y conocimiento colectivo con otras organizaciones (FIAN Colombia e IPC han colaborado en estas reflexiones), que colocan los temas de autoprotección y alertas tempranas como una situación a definirse con prioridad dadas las acciones de presión sobre las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales con las cuales se trabaja y articula a nivel nacional.

En el plano económico, el 2018 fue un año duro para nuestra gestión de iniciativas, el panorama electoral con la ley de garantías y la incertidumbre frente al devenir político, económico y social con el nuevo gobierno a nivel nacional e internacional, frenó la posibilidad de apertura de convocatorias y nuestras posibilidades de negociación de propuestas con actores institucionales nacionales. Sin embargo gracias al posicionamiento político se lograron tener algunos ingresos adicionales en nuestro presupuesto para desarrollar tareas o acciones puntuales. Estos fondos provinieron de Swissaid y Lutheran World Relief.

Se hicieron acercamientos y realizaron acciones de debate político internacional con Forum Syd en Estocolmo y se empezaron a analizar escenarios de gestión conjunta con la cooperación sueca.

Se dialogó con el encargado de proyectos para Colombia de Misereor, agencia de cooperación alemana y se construyeron dos borradores de propuestas que fueron enviados finalizando el año 2018 y sobre las cuales no hemos tenido retroalimentación o respuesta aun.

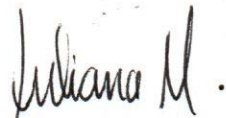
En España se dialogó con la red REAS Euskadi en Bilbao, con una representante del Foro Rural Mundial en la ciudad de Barcelona, con la oficina de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid, con el secretario de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en Madrid y con la secretaria de la Plataforma DESC España en Madrid. A cada uno de estos actores se les presentó el trabajo actual de ATI y se exploraron las posibilidades de cooperación, pero se observó en general bajas posibilidades para avanzar en ello, ya sea porque su cooperación es directa con el gobierno local de Bogotá o nacional, o sus ayudas están mediadas por relaciones directas con las agencias de cooperación españolas que tienen asiento en Colombia.



LILIANA MARCELA VARGAS VÁSQUEZ

Representante Legal.

Directora General.



JULIANA MILLAN GUZMÁN

Directora Política.